

Imprimir

El conjunto de decisiones adoptadas por Abelardo de la Espriella durante sus primeros meses de gobierno permite identificar las prioridades que tiene en mente y, al mismo tiempo, los principales puntos de choque que comienzan a marcar su relación con el Congreso, las instituciones judiciales, la oposición y distintos sectores de la sociedad.

De la Espriella ha buscado diferenciarse radicalmente del gobierno de Gustavo Petro y echar por tierra sus reformas. Mientras este último hizo de la denominada “paz total”, las reformas sociales y la intervención estatal algunos de sus principales ejes, de la Espriella ha colocado en el centro de su discurso la seguridad por la fuerza, el fortalecimiento de la seguridad del Estado, el apoyo a los sectores empresariales, la lucha contra las organizaciones criminales, y la subordinación a los mandatos de los Estados Unidos. Este giro político ha producido apoyos importantes – tanto entre las fuerzas políticas como en la sociedad -, pero también resistencias que comienzan a alzar su voz en los escenarios públicos, dejando una vez más en evidencia la polarización política del país.

Uno de los aspectos más visibles de la administración de De la Espriella ha sido el cambio de estrategia frente a las organizaciones armadas al margen de la ley. En efecto, el Gobierno ha dado por terminados los procesos de diálogo y espacios sociojurídicos heredados de la política de “paz total” y ha optado por fortalecer las operaciones militares y policiales abriendo, de paso, la puerta a abusos de poder que causan indignación entre distintos sectores de la sociedad. En un balance de sus primeros 36 días de gobierno, de la Espriella afirmó que las autoridades habían capturado más de 17.000 personas y que se habían producido importantes operaciones contra estructuras “narcoterroristas”. Desde su perspectiva, estos resultados constituyen una señal de recuperación de la autoridad estatal y responden a una de las principales demandas de numerosos sectores de la sociedad víctimas de prácticas extorsivas, atracos e intimidación por parte de una delincuencia sin control.

Además, el Gobierno ha reforzado la cooperación con Estados Unidos en el marco del llamado Escudo de las Américas el cual, según Christopher Landau, Subsecretario de Estado de los Estados Unidos, es “un grupo de naciones del Hemisferio Occidental ampliamente alineados en objetivos políticos, económicos y de seguridad clave. Entre estos se encuentra

la imperativa necesidad de enfrentar y derrotar a los grupos criminales organizados que, lamentablemente a menudo son ayudados y respaldados por actores corruptos y cómplices dentro de la región”. Como resultado de esta cooperación se han intensificado las extradiciones a los Estados Unidos mientras se anuncia la creación de un “bloque de búsqueda” que desde la Presidencia tendría la misión de perseguir a funcionarios corruptos.

Esta política que ha despertado simpatía en algunos sectores también constituye uno de los principales puntos de confrontación en el país. De hecho, la reanudación de bombardeos contra estructuras armadas ha generado cuestionamientos judiciales y políticos, particularmente por el riesgo de afectar a menores de edad reclutados por los grupos ilegales, así como por posibles desplazamientos forzados. En la práctica, el debate no se ha centrado en la importancia de la seguridad sino en la determinación de los límites jurídicos y humanitarios de la acción militar.

Al margen de la política de seguridad, el problema estructural que enfrenta el Gobierno es el de las finanzas públicas. Argumentando que el país se encuentra en una situación crítica y confrontado a la necesidad de controlar el déficit, de la Espriella ha planteado recurrir al FMI para reducir los intereses de la deuda y reducir el Estado lo cual incidirá en reformas estructurales. La propuesta de ajuste fiscal asociada a la idea de un Estado más pequeño se ha centrado en entidades relacionadas con la paz como la JEP y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidos. Dicha política de austeridad ha sido duramente criticada por ser políticamente costosa, sin una clara priorización del gasto y sin claros procedimientos administrativos, los cuales han sido sustituidos por poderes extraordinarios utilizados por el Ejecutivo. De hecho, el 30 de septiembre el Congreso seguía reclamando la agenda del Gobierno. De la Espriella ha preferido delinear su modelo de Gobierno sin depender de consensos y recurrir a la emisión de decretos. El resultado ha sido una relación tensa entre la Casa de Nariño y el Congreso donde la oposición busca reconstruirse.

Un Congreso donde no termina por conformarse un bloque de gobierno a pesar de que ante el Consejo Nacional Electoral once partidos se declararon partidos de gobierno, seis asumieron una posición independiente y tres se situaron formalmente en la oposición. Se

destaca en él una derecha estremecida por las tensiones entre el Centro Democrático y los abelardistas, producto de una puja política por el liderazgo y la supremacía de la derecha de cara a las elecciones regionales de 2027. Un Congreso donde la oposición tampoco constituye un bloque homogéneo y donde campean a sus anchas la intolerancia y la agresividad.

El resultado de una dinámica política en la que la oposición institucional es relativamente reducida, las ideas de una derecha ultramontana abren el espacio a un presidente autoritario proclive a un cierto fascismo latinoamericano que la región ya conoció. Un fascismo que rechaza el diálogo y prefiere el uso de la fuerza bruta, que busca silenciar a sus opositores generando el miedo, censurando la crítica, perfilando a sus adversarios, construyendo listas negras y construyendo megacárceles sin reparar en derechos humanos al igual que sus modelos paradigmáticos (Donald Trump, Javier Milei y Nayib Bukele).

Aunque todos los gobiernos buscan controlar la agenda y construyen su relato, el de Abelardo de la Espriella añade un ingrediente a su acción: el de la propaganda permanente apoyada en redes, en las llamadas bodegas que se destacan por su violencia verbal, pero sin argumentos, y en el recurso a sofisticados instrumentos tecnológicos. Sus apuestas son, sin embargo, torpes y arriesgadas. Se ha botado en brazos del gobierno de Donald Trump haciendo suyas todas sus estratagemas y principios. Quiere volver a Colombia un país minero; entronizar una economía de mercado sin controles estatales; entregar los bienes públicos a intereses privados; potenciar el uso utilitarista de la religión y sumarse a las tesis sionistas. Su política exterior no tiene estrategia y olvida que Trump está *ad portas* de una derrota histórica mientras Netanyahu es repudiado por casi todos los países del mundo.

En pocas palabras, puede decirse que Abelardo de la Espriella tiene buenos asesores de propaganda, pero malos asesores políticos.

Rubén Sánchez David

Foto tomada de: [Las2orillas.co](https://las2orillas.co)